

		
	Al responder por favor cite este número 13012024E2000624	
	Fecha Radicado: 2024-01-15 15:20:50	
	Código de Verificación: dd906	Folios: 9
	Radicator: Ventanilla Minambiente	Anexos: 5
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible		

Bogotá D.C. 15 de enero de 2024.

Doctor:

**MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ.**

CONSEJERO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERA SALA DE LO CONTENCIOSO  
ADMINISTRATIVO.

Correo Electrónico: [ces3secr@consejodeestado.gov.co](mailto:ces3secr@consejodeestado.gov.co)

<b>RADICADO:</b>	11001-03-26-000-2020-00055-00 (66052)
<b>TIPO DE PROCESO:</b>	RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – LEY 1437 DE 2011.
<b>RECURRENTE:</b>	CONSORCIO PROGRESO BUGA
<b>DEMANDADO:</b>	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y OTROS
<b>ASUNTO:</b>	ESCRITO DE MANIFESTACIÓN FRENTE AL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN SUSTENTADO POR LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO PROGRESO BUGA.

Honorable señor Magistrado:

**IVÁN ALBEIRO ESCOBAR ESCOBAR**, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 87.062.837 de Pasto(N) y portador de la tarjeta profesional de abogado No. 232.558 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en mi calidad de apoderado del **MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**, tal y como consta en el poder anexo, por medio del presente escrito, estando dentro del término otorgado por su honorable despacho, me permito descorrer traslado de **RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN SUSTENTADO POR LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO PROGRESO BUGA**.

### I. OPORTUNIDAD Y PROCEDENCIA

Respetado señor Magistrado, me permito presentar a su despacho **ESCRITO DE MANIFESTACIÓN FRENTE AL RECURSO DE REVISIÓN SUSTENTADO POR LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO PROGRESO BUGA**, encontrándome dentro del término otorgado por su despacho de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 199 del CPACA en razón a que la Cartera Ministerial que represento fue

notificada en fecha 05 de diciembre de 2023 y teniendo en cuenta el periodo de vacancia judicial cual inició el fecha 20 de diciembre de 2023 y culminó en fecha 10 de enero de 2024, periodo en que se encuentran suspendidos los términos judiciales, por lo tanto nos encontramos actuando dentro del término establecido por su despacho a fin de presentar las siguientes manifestaciones respetuosas frente al recurso extraordinario de revisión.

## II. PRONUNCIAMIENTO FRENTE AL RECURSO DE REVISIÓN.

Inicialmente el Recurso extraordinario de revisión planteado por el apoderado judicial del CONSORCIO PROGRESO BUGA, puntualiza como causal de revisión de la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del Valle, la prevista en el numeral 5 del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo:

"5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación".

Argumento en que confluimos por diferente razón la cual nos permitiremos exponer de forma sucinta a su despacho.

Inicialmente somos conscientes que nos encontramos fuera del término procesal que nos permita sustentar un recurso extraordinario de revisión, pero no podemos dejar pasar esta oportunidad para esbozar los subsiguientes argumentos que con seguridad desde su punto de vista y como órgano de cierre del presente proceso le permitirían a su despacho alterar el rumbo del fallo precedente.

Lo anterior en razón a una tangente interpretación errónea de la Ley por parte del Tribunal Administrativo del Valle; para el caso en particular al realizar un análisis de la sentencia No. 27 de fecha 2 de marzo 2018 emitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del proceso Rad. 76109-33-31-002-2008-0071-01, en la cual declara administrativamente, civil, patrimonial y solidariamente responsable a esta Cartera Ministerial por falla de servicio de previsión del riesgo y condenan el pago de los perjuicios morales que se causaron a los accionantes, encontramos que la Magistrada Ponente dentro del acápite **2.8 ANÁLISIS DE CASO CONCRETO**, examina a la luz de los Decreto 919 de 1989 y 093 de 1998 el material probatorio efectivamente recaudado y puntualmente en el numeral 12 refiere lo siguiente:

"En ese marco fáctico, debidamente acreditado, se corrobora la causa para pedir, esto es, que **los demandados Ministerio de Medio Ambiente, autoridad encargada hacer evaluación, seguimiento y control de los factores de riesgo ecológico y coordinar las acciones para prevenir la emergencia**; el Ministerio del Interior desde su Oficina Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, en su calidad de autoridad ambiental en el territorio;

el Distrito de Buenaventura y el Departamento del Valle como autoridades responsables de la prevención de Desastres y de la planeación y ordenación del territorio en sus ámbitos regional y local; el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías y los integrantes del Consorcio Progreso Buga, ya como entidades públicas privadas a cargo de labores preoperativas para el mantenimiento de la vía Cabal Combo, ya como asesores, coordinadores o colaboradores del Comité Técnico Nacional para la Prevención de Desastres, por Comisión, fallaron en la orientaron y adopción de medidas de prevención del riesgo de remoción en masa, porque conocían o estaban en posición de conocer la magnitud del mismo y su impacto en el elemento "personas", pero no ejecutaron acciones precisas para que la comunidad contara con alertas tempranas y un plan de evacuación que permitiera poner a salvo sus vidas. En resumen, incumplieron su deber legal de prevención".

Lo anteriormente transcrito consideramos trasgrede toda posible interpretación de las de las funciones asignadas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el decreto 1523 de 2012, toda vez que no le es posible la adopción de medidas de prevención a la Cartera Ministerial que represento, dado que de conformidad con las funciones y objetivos asignadas en el Decreto 3570 de 2011 y en concordancia con el artículo 5 de la Ley 99 de 1993, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene a su cargo fungir "como organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de impulsar una relación de respeto y armonía del hombre con la naturaleza y de definir, en los términos de la presente ley, las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible", ahora bien, de conformidad con las competencias establecidas en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), en particular las competencias de las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible (en adelante Corporaciones) en materia de gestión del riesgo de desastres, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, así como en los Decretos 1504 de 1998, 097 de 2006, 3600 de 2007, 4066 de 2008, 2372 de 2010 y 1640 de 2012, entre otros. De manera específica, son las siguientes:

- Como miembro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y de los Consejos Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo, desempeña labores de gestión del riesgo referentes a la sostenibilidad ambiental del territorio, prevención y adaptación al cambio climático, y participa en la formulación de los Planes Municipales y Departamentales de Gestión del Riesgo.
- Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa, protección y

adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en coordinación con los organismos directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras, conforme a las disposiciones legales y a las previsiones técnicas correspondientes. Cuando se trate de obras de riego y avenamiento que de acuerdo con las normas y los reglamentos requieran de Licencia Ambiental, esta deberá ser expedida por el Ministerio del Medio Ambiente (Ley 99, artículo 31, numeral 19).

- Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, en coordinación con las demás autoridades competentes, y asistirles en los aspectos medioambientales en la prevención y atención de emergencias y desastres; adelantar con las administraciones municipales o distritales programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces y reforestación (Ley 99, artículo 31, numeral 23).
- Apoyar a las entidades territoriales en la implementación de los procesos de gestión del riesgo, de acuerdo con sus competencias y sin eximir de responsabilidad a las demás autoridades, en el marco de los principios de solidaridad, coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva.
- Apoyar a los entes territoriales en los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo, e integrarlos a los Planes de Ordenación de Cuencas, de Gestión Ambiental y de ordenamiento territorial y desarrollo.
- Concertación de asuntos ambientales en los procesos de formulación, adopción, revisión y ajuste de POTs y Planes Parciales en los municipios, así como la definición de determinantes ambientales del ordenamiento.
- Encargarse del manejo y cuidado de las áreas catalogadas como de riesgo no mitigable (Ley 388, art. 121).

A manera de ilustración, resulta oportuno recordar las competencias de los Gobernadores y Alcaldes Municipales en materia de gestión del riesgo de desastres, quienes cumplen una doble función, (1) como agente territorial del SNGRD, de acuerdo a los artículos 12 a 14 de la Ley 1523 y (2) como encargado de ordenar el desarrollo de su territorio. Bajo ese marco, el Alcalde es responsable de articular los procesos y etapas de la gestión del riesgo de desastres y el ordenamiento territorial, tendientes a fortalecer la toma de decisiones para reducir el riesgo en su territorio, desempeñando el Alcalde, entre otras, las siguientes funciones:

- Ser responsable de la gestión del riesgo (Ley 1523, artículo 2).

- Representar en su municipio o Distrito al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y ser responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el municipio (Ley 1523, artículo 14).
- Dirigir los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (Ley 1523, art. 28).
- Formular y actualizar el Plan Municipal o Distrital de Gestión del Riesgo y la Estrategia Municipal de Respuesta, e integrar sus determinaciones en el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo Municipal.
- Incorporar las determinantes de gestión del riesgo en el POT y en los instrumentos de planificación que los desarrollen, atendiendo a lo dispuesto en el Decreto 1807 de 2014, compilado en el decreto 1077 de 2015- Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.
- Incorporar la gestión del riesgo en la inversión pública municipal.
- Adoptar los planes generales del POT e incluir como mínimo en temas de Gestión del Riesgo de Desastres la localización de las zonas de amenaza y riesgo y la determinación de zonas de alto riesgo para la localización de asentamientos urbanos.
- Mantener actualizado el inventario de las zonas que presenten altos riesgos para la localización de asentamientos humanos, y adelantar programas de reubicación de los habitantes o proceder al desarrollo de las operaciones necesarias para eliminar el riesgo en los asentamientos localizados en dichas zonas. (Ley 2 de 1991, artículo 5).
- De acuerdo con la Ley 388, artículo 21, las áreas catalogadas como de riesgo no recuperable que hayan sido desalojadas a través de planes o proyectos de reubicación de asentamientos humanos serán entregadas a las Corporaciones Autónomas Regionales o a la autoridad ambiental para su manejo y cuidado de forma tal que se evite una nueva ocupación.
- El alcalde municipal o distrital será responsable de evitar que tales áreas se vuelvan a ocupar con viviendas y responderá por este hecho.
- Formular y ejecutar proyectos de reasentamiento para población en alto riesgo no mitigable.
- Constituir el Fondo Municipal de Gestión del Riesgo con el propósito de invertir, destinar y ejecutar sus recursos en la adopción de medidas de conocimiento y reducción del riesgo de desastres, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción.

De acuerdo con el Artículo 31 de la Ley 1523 de 2012, las corporaciones autónomas regionales o de desarrollo sostenible, como integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, además de las funciones establecidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las leyes que las modifiquen, presentan las siguientes características:

- Las CAR son integrantes de los consejos territoriales de gestión del riesgo en desarrollo de los principios de solidaridad, coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva.
- El papel de las CAR es complementario y subsidiario respecto a la labor de alcaldías y gobernaciones, y estará enfocado al apoyo de las labores de gestión del riesgo que corresponden a la sostenibilidad ambiental del territorio.
- Apoyarán a las entidades territoriales de su jurisdicción en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental y de ordenamiento territorial y de desarrollo.

Con base en lo anterior, es necesario señalar que es el Alcalde Municipal el responsable directo de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento, la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción; y en esta medida le corresponde implementar, ejecutar, desarrollar las políticas, actividades y gestiones tendientes a dicho fin, y en caso de requerir por desborde de sus capacidades humanas y financieras, acudir al Gobernador Departamental.

En atención a la solicitud del asunto, nos permitimos informarle que es en las instancias anteriormente mencionadas, en las cuales se deben abordar los temas de gestión del riesgo de desastres en dónde participan las Autoridades Ambientales, que para éste caso por jurisdicción se realiza a través de la Corporación autónoma regional del Valle del Cauca - CVC, así mismo mencionar que para la intervención directa en el territorio en relación con la gestión del riesgo de desastres, debe realizarse mediante el conducto regular en el marco del SNGRD. Las entidades territoriales (municipios, distritos y departamentos) en su orden y jerarquía son quienes actúan en su territorio como agentes del SNGRD.

Por lo anterior este tipo eventos debe ser abordado en el marco del Consejo Municipal y/o Departamental para la gestión del Riesgo, y desde dicho espacio realizar la gestión que se considere necesaria para tomar las decisiones que conlleven a realizar una intervención efectiva, soportada en el respectivo análisis técnico que se requiera.



Ahora bien, se considera que no se realiza una adecuada interpretación del término “**riesgo ecológico**” que es mencionado en el numeral 35 del artículo 5 de la Ley 99 del 93, y el cual no ha sido definido por esta normativa y que en el contexto de esta Ley implica evaluar y gestionar las amenazas y peligros que podrían afectar los **elementos del medio ambiente, como la fauna, la flora, los ecosistemas y los recursos naturales**. Este término no debería confundirse con el término “**riesgo de desastres**”, el cual está plenamente definido por el artículo 4 de la ley 1523 de 2012:

“Riesgo de desastres:

Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un período de tiempo específico y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente, el riesgo de desastres se deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad.”

Una vez aclarado los anteriores términos podemos deducir con claridad que los argumentos expuestos por el la magistrada ponente del tribunal Administrativo del Valle al puntualizar que la Cartera Ministerial que represento es la **autoridad encargada hacer evaluación, seguimiento y control de los factores de riesgo ecológico y coordinar las acciones para prevenir la emergencia**; es errónea en razón a subsumir el término Riesgo Ecológico con el término o Riesgo de Desastres, argumento que es la única causal que encontramos dentro del análisis de la sentencia por el cual es condenada esta Cartera Ministerial.

Puntualmente es necesario se tenga de presente lo establecido por la Corte Constitucional en SENTENCIA T-118A DE 2013, en la cual se analiza la configuración del defecto sustantivo en razón a la errónea interpretación de la ley situación que es palpable en el presente asunto de estudio<sup>1</sup>.

**“DEFECTO SUSTANTIVO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia**

*La jurisprudencia constitucional ha establecido que el juez ordinario incurre en una vía de hecho por defecto sustantivo cuando en ejercicio de su autonomía e independencia, desbordan con su interpretación la Constitución o la ley. Puede presentarse cuando el juez: (i) fundamenta su decisión en una norma derogada o declarada inexecutable, (ii) basa su decisión en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, (iii) el fallo carece de motivación material o es manifiestamente irrazonable, (iv) la interpretación desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance, (v) interpreta la norma sin tener en cuenta otras*

disposiciones normativas aplicables, (vi) desconoce la normatividad aplicable al caso concreto.

*Sin embargo, no cualquier divergencia frente al criterio interpretativo en una decisión judicial configura un defecto sustantivo, sólo aquellas que resultan irrazonables, desproporcionadas, arbitrarias y caprichosas pueden ser objeto de la acción de tutela".*

Sintetizando lo anterior es claro que la interpretación errónea es una modalidad de violación de la ley que únicamente ocurre por la vía del puro derecho, puesto que la equivocada hermenéutica de una norma es del todo ajena a la comprensión que haría un juez a los hechos del proceso y a las pruebas que sirvan para acreditarlo, por otra parte entendemos el estadio procesal en el que se encuentra el proceso pero no es menos importante recalcar a su Honorable Despacho lo establecido por la Sección Tercera-Subsección A, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en referencia al Recurso Extraordinario de Revisión.

*"El recurso extraordinario de revisión constituye una excepción al principio de inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada, ya que con este se abre la posibilidad de controvertir un fallo en firme, siempre que se configure alguno de los supuestos consagrados en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011-CPACA. De modo que el objeto del recurso es procurar el restablecimiento de la justicia material, cuando se advierta que ha sido afectada por situaciones o circunstancias exógenas que no pudieron plantearse en el proceso correspondiente, pero que, a juicio del legislador, revisten tal gravedad que autorizan romper el principio de la cosa juzgada (...). En tal virtud, este instrumento persigue restar eficacia a una providencia ejecutoriada, por contrariar esta los principios de justicia y verdad material. En ese orden, lo que se procura es que se profiera una nueva decisión que tenga en cuenta las circunstancias o supuestos acreditados durante el trámite del recurso extraordinario, siempre que se verifique que estos no pudieron ventilarse oportunamente al interior del proceso primigenio ordinario."*

### III. SOLICITUD

ÚNICA: Respetuosamente solicito se tenga presente los argumentos antecedentes en el momento de resolver el recurso interpuesto por el apoderado judicial de los **INTEGRANTES DEL CONSORCIO PROGRESO BUGA** y se disponga a modificar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle y se disponga a exonerar de la condena impuesta erróneamente a la Cartera Ministerial que representó.



#### IV. PRUEBAS

Solicito se tengan como pruebas la documental que obra en el expediente, la normatividad enunciada en el presente memorial y la respuesta brindada por la Oficina de Cambio Climático y Gestión del Riesgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante radicado 31012024E3000776 de enero de 2024.

#### V. ANEXOS

Poder legalmente otorgado por la jefa de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con sus anexos.

#### VI. NOTIFICACIONES

Mi mandante recibirá notificaciones en la Calle 37 No. 8 – 40 de la ciudad de Bogotá D.C. y al buzón electrónico para notificaciones judiciales: [procesosjudiciales@minambiente.gov.co](mailto:procesosjudiciales@minambiente.gov.co)

El suscrito las recibirá en la Calle 37 No. 8 – 40, Piso 5° de la ciudad de Bogotá D.C. y al buzón electrónico para notificaciones judiciales: [procesosjudiciales@minambiente.gov.co](mailto:procesosjudiciales@minambiente.gov.co) – [iaescobare@minambiente.gov.co](mailto:iaescobare@minambiente.gov.co)

Atentamente,



**IVÁN ALBERO ESCOBAR ESCOBAR.**  
**C.C. 87.062.837 de Pasto(N).**  
**T.P. No. 232.558 del C.S. de la J.**

<sup>i</sup> Sentencia T-118A de 2013 Corte Constitucional de Colombia -  
<https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=71222&dt=S>

<sup>ii</sup> <https://procesal.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/sites/9/2022/03/76111-33-31-701-2010-00201-01.pdf>

## MEMORANDO

31012024E3000776

Bogotá, D.C. 15 de enero de 2024

PARA: **JUAN SEBASTIAN RUIZ CORTES.**  
Coordinador Grupo Procesos Judiciales

DE: **ALEXANDER FIGUEROA MALDONADO**  
Coordinador Grupo de Gestión del Riesgo

ASUNTO: INSUMOS – CONTESTACION RECURSO DE REVISION ACCION DE GRUPO No. 11001-03-26-000-2020-00055-00(66052) Radicado Interno Minambiente **13012024E3000561**

Cordial saludo,

En atención a la solicitud de **INSUMOS RECURSO DE REVISION ACCION DE GRUPO No. 11001-03-26-000-2020-00055-00(66052)**, nos permitimos precisar que conforme a las funciones y objetivos asignadas en el Decreto 3570 de 2011 y en concordancia con el artículo 5 de la Ley 99 de 1993, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene a su cargo fungir "*como organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de impulsar una relación de respeto y armonía del hombre con la naturaleza y de definir, en los términos de la presente ley, las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible*", ahora bien, de conformidad con las competencias establecidas en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), en particular las competencias de las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible (en adelante Corporaciones) en materia de gestión del riesgo de desastres, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, así como en los Decretos 1504 de 1998, 097 de 2006, 3600 de 2007, 4066 de 2008, 2372 de 2010 y 1640 de 2012, entre otros. De manera específica, son las siguientes:

- Como miembro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y de los Consejos Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo,



SC-2000142



SA-2000143

desempeña labores de gestión del riesgo referentes a la sostenibilidad ambiental del territorio, prevención y adaptación al cambio climático, y participa en la formulación de los Planes Municipales y Departamentales de Gestión del Riesgo.

- Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en coordinación con los organismos directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras, conforme a las disposiciones legales y a las previsiones técnicas correspondientes. Cuando se trate de obras de riego y avenamiento que de acuerdo con las normas y los reglamentos requieran de Licencia Ambiental, esta deberá ser expedida por el Ministerio del Medio Ambiente (Ley 99, artículo 31, numeral 19).
- Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, en coordinación con las demás autoridades competentes, y asistirles en los aspectos medioambientales en la prevención y atención de emergencias y desastres; adelantar con las administraciones municipales o distritales programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces y reforestación (Ley 99, artículo 31, numeral 23).
- Apoyar a las entidades territoriales en la implementación de los procesos de gestión del riesgo, de acuerdo con sus competencias y sin eximir de responsabilidad a las demás autoridades, en el marco de los principios de solidaridad, coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva.
- Apoyar a los entes territoriales en los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo, e integrarlos a los Planes de Ordenación de Cuencas, de Gestión Ambiental y de ordenamiento territorial y desarrollo.
- Concertación de asuntos ambientales en los procesos de formulación, adopción, revisión y ajuste de POTs y Planes Parciales en los municipios, así como la definición de determinantes ambientales del ordenamiento.
- Encargarse del manejo y cuidado de las áreas catalogadas como de riesgo no mitigable (Ley 388, art. 121).

A manera de ilustración, resulta oportuno recordar las competencias de los Gobernadores y Alcaldes Municipales en materia de gestión del riesgo de



SC-2000142



SA-2000143

desastres, quienes cumplen una doble función, (1) como agente territorial del SNGRD, de acuerdo a los artículos 12 a 14 de la Ley 1523 y (2) como encargado de ordenar el desarrollo de su territorio. Bajo ese marco, el Alcalde es responsable de articular los procesos y etapas de la gestión del riesgo de desastres y el ordenamiento territorial, tendientes a fortalecer la toma de decisiones para reducir el riesgo en su territorio, desempeñando el Alcalde, entre otras, las siguientes funciones:

- Ser responsable de la gestión del riesgo (Ley 1523, artículo 2).
- Representar en su municipio o Distrito al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y ser responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el municipio (Ley 1523, artículo 14).
- Dirigir los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (Ley 1523, art. 28).
- Formular y actualizar el Plan Municipal o Distrital de Gestión del Riesgo y la Estrategia Municipal de Respuesta, e integrar sus determinaciones en el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo Municipal.
- Incorporar las determinantes de gestión del riesgo en el POT y en los instrumentos de planificación que los desarrollen, atendiendo a lo dispuesto en el Decreto 1807 de 2014, compilado en el decreto 1077 de 2015- Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.
- Incorporar la gestión del riesgo en la inversión pública municipal.
- Adoptar los planos generales del POT e incluir como mínimo en temas de Gestión del Riesgo de Desastres la localización de las zonas de amenaza y riesgo y la determinación de zonas de alto riesgo para la localización de asentamientos urbanos.
- Mantener actualizado el inventario de las zonas que presenten altos riesgos para la localización de asentamientos humanos, y adelantar programas de reubicación de los habitantes o proceder al desarrollo de las operaciones necesarias para eliminar el riesgo en los asentamientos localizados en dichas zonas. (Ley 2 de 1991, artículo 5).
- De acuerdo con la Ley 388, artículo 21, las áreas catalogadas como de riesgo no recuperable que hayan sido desalojadas a través de planes o proyectos de reubicación de asentamientos humanos serán entregadas a

las Corporaciones Autónomas Regionales o a la autoridad ambiental para su manejo y cuidado de forma tal que se evite una nueva ocupación.

- El alcalde municipal o distrital será responsable de evitar que tales áreas se vuelvan a ocupar con viviendas y responderá por este hecho.
- Formular y ejecutar proyectos de reasentamiento para población en alto riesgo no mitigable.
- Constituir el Fondo Municipal de Gestión del Riesgo con el propósito de invertir, destinar y ejecutar sus recursos en la adopción de medidas de conocimiento y reducción del riesgo de desastres, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción.

De acuerdo con el Artículo 31 de la Ley 1523 de 2012, las corporaciones autónomas regionales o de desarrollo sostenible, como integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, además de las funciones establecidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las leyes que las modifiquen, presentan las siguientes características:

- Las CAR son integrantes de los consejos territoriales de gestión del riesgo en desarrollo de los principios de solidaridad, coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva.
- El papel de las CAR es complementario y subsidiario respecto a la labor de alcaldías y gobernaciones, y estará enfocado al apoyo de las labores de gestión del riesgo que corresponden a la sostenibilidad ambiental del territorio.
- Apoyarán a las entidades territoriales de su jurisdicción en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental y de ordenamiento territorial y de desarrollo.

Con base en lo anterior, es necesario señalar que es el Alcalde Municipal el responsable directo de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento, la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción; y en esta medida le corresponde implementar, ejecutar, desarrollar las políticas, actividades y gestiones tendientes a dicho fin, y en caso de requerirlo por desborde de sus capacidades humanas y financieras, acudir al Gobernador Departamental.

En atención a la solicitud del asunto, nos permitimos informarle que es en las instancias anteriormente mencionadas, en las cuales se deben abordar los

temas de gestión del riesgo de desastres en dónde participan las Autoridades Ambientales, que para éste caso por jurisdicción se realiza a través de la Corporación autónoma regional del Valle del Cauca - CVC, así mismo mencionar que para la intervención directa en el territorio en relación con la gestión del riesgo de desastres, debe realizarse mediante el conducto regular en el marco del SNGRD. Las entidades territoriales (municipios, distritos y departamentos) en su orden y jerarquía son quienes actúan en su territorio como agentes del SNGRD.

Por lo anterior este tipo eventos debe ser abordado en el marco del Consejo Municipal y/o Departamental para la gestión del Riesgo, y desde dicho espacio realizar la gestión que se considere necesaria para tomar las decisiones que conlleven a realizar una intervención efectiva, soportada en el respectivo análisis técnico que se requiera.

Ahora bien, se considera que no se realiza una adecuada interpretación del término **"riesgo ecológico"** que es mencionado en el numeral 35 del artículo 5 de la Ley 99 del 93, y el cual no ha sido definido por esta normativa y que en el contexto de esta Ley implica evaluar y gestionar las amenazas y peligros que podrían afectar los **elementos del medio ambiente, como la fauna, la flora, los ecosistemas y los recursos naturales**. Este término no debería confundirse con el término **"riesgo de desastres"**, el cual está plenamente definido por el artículo 4 de la ley 1523:

*"Riesgo de desastres:*

*Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un período de tiempo específico y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente, el riesgo de desastres se deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad."*

Cordialmente,



**ALEXANDER FIGUEROA MALDONADO**

Coordinador Grupo de Gestión del Riesgo

Anexos: N/A

Revisó: Alexander Figueroa Maldonado

Elaboró: Sebastián López